

Movimientos en Ruta N

Luego de la renuncia de varios miembros de la junta de Ruta N, la alcaldía de Medellín nombró al empresario Juan Archila como nuevo directivo.

Hidroituango, sin covid-19

Tras una semana polémica, EPM informó que los 903 trabajadores de Hidroituango con covid-19 ya se recuperaron y no hay brotes de la enfermedad.

Primer plano

DOMINGO

EL TIEMPO • 16 DE AGOSTO DE 2020

@eltiempo

Los alcances de la tormenta que sacude al Grupo EPM

El reclamo de 9,9 billones de pesos a los contratistas de Hidroituango desató una crisis que afecta la tradicional relación entre el poder público y privado.

REDACCIÓN MEDELLÍN | @ColombiaET



El proyecto Hidroituango muestra un avance del 79 por ciento en su construcción. Empezaría a operar en el 2022. FOTO: EL TIEMPO

La tormenta que enfrentó esta semana el Grupo EPM, tras la decisión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, presidente de la junta directiva, y el gerente de la empresa, Álvaro Guillermo Rendón, de comenzar un proceso de reclamación de 9,9 billones de pesos a los constructores de Hidroituango por los problemas de este proyecto energético, puso fin con la alianza que tuvieron por años las administraciones de Medellín y el importante Grupo Empresarial Antioqueño (GEA).

Aunque legalmente Quintero y Rendón tomaron esta decisión sin consultar a la junta directiva, sus ocho miembros, entre los que se encontraban importantes directivos de grandes empresas antioqueñas como Manuel Santiago Mejía Olate, quien dirige Colombiana de Comercio S.A. (Corbeta), que abarca la cadena de hipermercados Alkosto, manifiestan su "preocupación y malestar" porque no los tomaron en cuenta y presentaron el martes su renuncia, la cual les fue aceptada.

"Dos veces EPM había llevado a la junta la decisión, sin tener que hacerlo, de demandar a contratistas y se determinó que no. Se perdieron oportunidades para recuperar recursos públicos. No me queda bien afirmar de forma taxativa, pero obviamente algunos miembros, lo sabe Medellín entera, hicieron o tienen relaciones muy cercanas con los consorcios demandados", dijo Quintero al EL TIEMPO.

Esta decisión desencadenó una crisis sin precedentes en la empresa, considerada la "joya de la corona" país (con ingresos el año pasado por \$18,4 billones), que generó que la firma Fit Ratings le rebajara la calificación.

Y además vinieron los embates de los partidos políticos tradicionales, los cuales no apoyaron al nuevo alcalde Quintero. El exalcalde Federico Gutiérrez, quien enfrentó en el 2018 la crisis de Hidroituango, señaló a Quintero de manejar un discurso de lucha de clases. "Es muy peligroso lo que Daniel Quintero y sus aliados están haciendo con EPM y la ciudad en general", dijo Gutiérrez.

A mitad de semana, el gerente Rendón dijo que "en Antioquia el sector público y privado van muy

GUILLELMO MEJÍA MEJÍA, abogado y analista político

“La junta debe ser de la entera confianza de quien dirige. Y, a mi parecer, aquí lo que hay es unos grandes intereses económicos en juego”.

“La junta debe ser de la entera confianza de quien dirige. Y, a mi parecer, aquí lo que hay es unos grandes intereses económicos en juego”.

de la mano, y esto no se romperá por esta situación”, pero el alcalde Quintero dejó claro el viernes el divorcio con el grupo empresarial al referirse al futuro de la junta. “Esta no será la junta del GEA, pero tampoco una junta contra el GEA”, dijo Quintero, quien aseguró que todo alcalde tiene derecho a tener una junta sobre la que, siendo independiente, pueda tener confianza.

El giro se evidenció con los primeros nombres de los nuevos integrantes de la junta: Jorge Iván Palacio, abogado jurista que fue presidente de la Corte Constitucional y magistrado de la Corte Suprema de Justicia; y Sandra Suárez, quien fue ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial durante el primer periodo del expresidente Álvaro Uribe y en la actualidad se desempeña como gerente general de Publicaciones Semana.

Quintero había anunciado a Alberto Preciado, abogado con doctorado en jurisprudencia, miembro de las juntas de Bavaria, Cafam, Cine Colombia, Decameron y Valorem, sin embargo, ayer se conoció que declinó el ofrecimiento.

La actual relación entre el poder público de Medellín y el GEA, en el cual hay empresas de la dimensión de Sura, Bancolombia y el Grupo Nutresa, más el respaldo de la Cámara de Comercio de Medellín y Proantioquia, comenzó, según expertos, a fortalecerse en 2004 cuando llegó a la alcaldía Sergio Fajardo y siguió afinándose con Alonso Salazar, Aníbal Gaviria y Federico Gutiérrez.

Las decisiones de Quintero también sacudieron a Ruta N, entidad de la alcaldía de Medellín que promueve la tecnología. El miércoles, un día después de la renuncia en pleno de la junta directiva de EPM, el mandatario decidió, de manera unilateral, relevar de la gerencia de Ruta N a Andrés Vázquez por el ingeniero Javier Fernández.

El recambio sorprendió a la junta directiva de Ruta N, la cual señaló a Quintero de “desconocer el conducto regular” y no tenerlos en cuenta para una decisión como esta. Finalmente, 7 de los 11 miembros decidieron renunciar a la entidad por los desacuerdos con el alcalde de Medellín.

De hecho, Azucena Restrepo, presidenta ejecutiva de Proantioquia y una de las directivas que salió de la junta de Ruta N, expresó que el manejo de la Alcaldía con las juntas directivas “son hechos que socavan la confianza en las instituciones y las personas y se convierten en una preocupante señal que va en detrimento del buen gobierno que ha caracterizado todo aquello que involucra a EPM”.

A su vez, Gonzalo Pérez, presidente del Grupo Sura, calificó de desafortunadas las agresiones de toda suerte que se desataron tras las decisiones sobre EPM, pero manifestó que siguen comprometidos con la región y el país. “Este es un momento relevante para saber canalizar nuestro interés por la ciudad desde el respeto y sin caer en el juego de discursos polarizantes. Mantengamos nuestro genuino interés por las instituciones que apreciamos, con el propósito de construir confianza”, dijo.

La historia de la alianza

Según analistas, el tema del empresariado y gran parte de la clase política antioqueña es que con la disputa se rompa la tradicional relación entre el poder público y el privado, que consideran parte del éxito de su economía y desarrollo.

Miguel Jaramillo, analista político, recuerda que desde que Medellín, el valle de Aburrá y Antioquia, los sectores bancario, textil, empresarial, de seguros, de servicio y de construcción han apalancado proyectos en alianzas público-privadas con los gobiernos municipal y departamental.

Según el experto, el momento más importante de esta alianza se dio en los años 80, cuando se con-

10

POR CIENTO

Hidroituango sería el responsable de aportar el 10 por ciento de la demanda energética del país para el 2022, cuando empezaría a operar su primera turbina.

8

MILLONES

Es el número de hogares colombianos que se beneficiarían cuando Hidroituango, con toda su capacidad instalada, genere 2400 megavatios.

4

AÑOS DE RETRASO

El proyecto contemplaba generar energía desde el 2018, pero la emergencia de ese año retrasó la operación hasta el 2022, es decir, un retardo de 4 años.

5

BILLONES DE PESOS

El sobrecosto de la obra por la emergencia rondaría los 5 billones de pesos. En 2012, cuando comenzó la construcción, el presupuesto era de 21,6 billones de pesos. Hoy es superior a los 16 billones de pesos.

solidó para enfrentar los efectos del narcotráfico sobre la sociedad. Esa alianza se vio fortalecida bajo figuras de organizaciones público-privadas y algunas fundaciones como Proantioquia y la Cámara de Comercio de Medellín.

Un importante representante del empresariado paísa, quien prefirió que su nombre no fuera revelado, recuerda que estos acuerdos entre la clase empresarial y la dirigencia política lograron que Antioquia fuera un ejemplo nacional en esa forma de administrar en la que priman las buenas prácticas de gobierno corporativo.

El empresario agrega que las prácticas fueron las que se irradiaron a la administración pública. “Estas consistían, entre otras, en juntas directivas independientes e idóneas, sin importar de qué lugar del país fueran, y apertura a voces diferentes y abiertas al debate público. También, la transparencia y la honestidad como norma inquebrantable”, señala.

Para él, lo que ocurre ahora es un delicado enfrentamiento entre unos intereses políticos que buscan borrar la presencia del empresario y volver a ese pasado antagónico de lucha de clases.

“Yo le diría al alcalde que no se sienta perseguido, y que esas acusaciones veladas en las que se habla de supuestos intereses de empresarios en el patrimonio de la ciudad no dejan de ser peligrosas. Mi llamado es a la serenidad y al análisis, dejando a un lado las emociones en este momento difícil”, expresa el empresario.

Nueva forma de gobierno?

Analistas políticos ven este pulso entre alcalde y empresarios como un viraje obvio en el manejo de la ciudad, tras el triunfo de un candidato sin relación con las administraciones anteriores.

Para el abogado Guillermo Mejía Mejía, exmagistrado del Consejo Nacional Electoral y analista político, hay un enfrentamiento, pero solo con un sector del empresariado porque “en Antioquia hay muchos otros empresarios de igual poder y respetabilidad”.

“La junta debe ser de la entera confianza de quien dirige. Y, a mi parecer, aquí lo que hay es unos grandes intereses económicos en juego. Es que en esa junta saliente había representantes de empresas constructoras y de seguros que serán las demandadas, entonces era lógico que pasara lo que pasó”, dice Mejía, quien agrega que el GEA ha dominado la junta de EPM hasta el punto de ser siempre mayoría con 5 de 9 miembros.

Para Carlos Builes, analista político y docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, entender el momento que vive Medellín implica analizar el tipo de proyecto que encabeza Quintero y cómo este se viene insertando en el modelo económico local. “Estos hechos, producen un cambio que le ha venido agregando un matiz distinto a la relación con el empresariado, tal como quedó evidenciado durante el mes de julio, cuando el alcalde propuso cambiar el objeto social de la Cámara de Comercio de Medellín y sus actividades con la inteligencia artificial, la computación cuántica, entre muchas otras.”

“Quintero viene de la escuela del Ministerio de las TIC, cuyo gran proyecto es desarrollar el gobierno informático, que no coincide con la tecnología como un instrumento sino como nueva manera de conformar el gobierno y la sociedad. Ese el centro”, plantea.

Agrega que hay un nuevo estilo de gobernar, en donde la figura del alcalde se está convirtiendo en la protagonista y comienza a reñir con la forma en la que históricamente se fueron organizando entidades locales, como EPM y Ruta N. “Cada vez es más claro que Quintero quiere conformar un movimiento político nacional. Eso hay que tenerlo en la mira. Por eso, a nivel local, hay un esfuerzo por cooptar las instituciones con la intención de ellas el enfoque del alcalde. Esta condición explica por qué cuando renunciaron las Juntas, Quintero las aceptó de forma inmediata”, precisa Builes.